

El modelo mediterráneo y el fin de los regímenes autoritarios

AUNQUE EN AQUEL MOMENTO PARECIÓ QUE TODOS LOS PAÍSES excomunistas de Europa del este iniciaron un período de transición casi simultáneo y notablemente coordinado, cada vez resulta más evidente que su desarrollo posterior resultó ser considerablemente desigual. Esto se debe en parte a que desde el inicio las diferentes regiones de Europa centro oriental tropezaron con expectativas bien distintas. El resto del mundo, y especialmente aquella parte del mundo que podía ejercer alguna influencia (y que de hecho lo hizo) sobre el posterior desarrollo de los cambios en estos países, tenía diferentes expectativas y actitudes hacia los nuevos regímenes que surgían. Esto tenía sus raíces en las valoraciones tan disímiles que existían con respecto al patrimonio, la cultura política y los potenciales económicos de los diferentes países. Ya en julio de 1990, incluso antes de que los nuevos estados hubieran tenido oportunidad de conformar sus nuevos rasgos, Henry Kissinger definió muy claramente cuál era la posición al respecto de los círculos que determinaban la política y la opinión internacionales. Polonia, Hungría y Checoslovaquia eran los países que se esperaba se integrasen rápidamente a las instituciones de la Unión Europea y ocupasen su legítimo lugar en el mundo occidental. Se consideraba, sin embargo, que países como Rumanía y Bulgaria pertenecían a “otro mundo” y que debían transcurrir décadas antes de que pudieran lograr un nivel de aceptación similar a los anteriores. En aquel momento todavía no estaba muy claro lo que estaba sucediendo en los países de la antigua Yugoslavia y en Albania, pero tanto su desarrollo político como la actitud de la comunidad internacional los colocaba dentro de esta última categoría.

NOTA DEL EDITOR: Fragmentos de la conferencia dictada en el curso *Cuba a la luz de otras transiciones*.

Vesna Pusic

Si bien la actitud y *las expectativas de la comunidad* internacional eran muy importantes, no constituían el único factor determinante en el curso del desarrollo político de los nuevos regímenes; no era siquiera necesariamente el factor más significativo. Un ejemplo de ello es Eslovenia, que al separarse de la federación yugoslava, no fue recibida con especial entusiasmo por el resto del mundo. Sin embargo, al erigir y consolidar de manera perseverante su infraestructura institucional y su proceso democrático, Eslovenia desarrolló gradualmente un sistema y clima políticos que se parecían más a los de la República Checa o Hungría que a los de cualquier otro de sus antiguos compatriotas yugoslavos.

Así que, junto a la “política de reconocimiento” del exterior; debía tomarse en consideración también *el carácter de la propia transición, y la disímil experiencia política de los años que condujeron al cambio de régimen*. La naturaleza de estos dos procesos resultó ser el punto de partida más importante de las diferencias que surgieron durante la post-transición. Este punto de partida definió los dos modelos básicos de transición, así como de los nuevos regímenes que surgieron de las elecciones de 1990 y 1991, y que podrían denominarse el Modelo Sur y el Modelo Norte, a pesar de que sólo se ajustan a esta alineación geográfica de manera parcial y en términos generales. Los criterios fundamentales que los diferencian no son de carácter geográfico, sino que parten de la naturaleza de sus gobiernos de post-transición. Teniendo esto en cuenta, se puede afirmar que el Modelo Norte se desarrolló en Polonia, Hungría, la República Checa y Eslovenia, mientras que el Modelo Sur se ajusta más a Rumania, Bulgaria, Eslovaquia, Croacia, Serbia y Albania.

Los estados del norte –Hungría, Polonia y Checoslovaquia– tuvieron sus revoluciones de terciopelo con manifestaciones populares que fueron la culminación pública de un largo proceso comenzado diez e incluso veinte años antes. Cuando se produce el auténtico cambio de gobierno y régimen, ya habían recorrido un extenso camino en la creación de un consenso. No sólo existía un consenso público universal sobre la necesidad de poner fin al viejo orden político, sino que ya existían al menos las bases de un punto de vista compartido acerca del futuro estado y su constitución política. La naturaleza de este nuevo régimen político ya formaba parte de las expectativas articuladas de estas sociedades.

Eslovenia, la única de las antiguas repúblicas yugoslavas que inició un proceso de consolidación democrática total después de los cambios, también tenía una historia de oposición articulada semi-institucionalizada anterior a la transición. Fue la revista política eslovena *Mladena* la que en la década de los ochenta atacó abiertamente las prácticas del Ejército Yugoslavo, y fue en los escenarios intelectuales, culturales y del rock eslovenos donde comenzaron a funcionar organizaciones, manifestaciones y publicaciones alternativas y de oposición. Asimismo, el Partido Comunista Esloveno fue el único que se opuso abiertamente al ascenso a poderes dictatoriales de Milosevic en Yugoslavia, y el que emprendió reformas internas similares a las del Partido Comunista de Hungría de Imre Pozsgay. La oposición eslovena fue única, dentro de las antiguas repúblicas yugoslavas, por su nivel de organización, coordinación y articulación.

Los países de esta primera categoría desarrollaron cuatro ventajas fundamentales en su experiencia de transición:

1. La primera era la existencia de una *infraestructura organizativa* con cierta experiencia política. El sindicato Solidaridad contaba ya con más de diez años de participación en el escenario político de Polonia cuando se convocaron las primeras elecciones libres en ese país. Durante un tiempo dispuso de un número de miembros equivalente a 1/4 de la población polaca. Representaba, por lo tanto, una experiencia de participación política no sólo comparativamente prolongada, sino extremadamente extendida.

La agrupación Carta 77 de Checoslovaquia poseía un número de miembros y afiliados incomparablemente menor. Sin embargo, logró sobrevivir durante trece años y ampliar sus actividades pese a estar sometida a una seria persecución, con lo que creció en experiencia política y credibilidad.

2. Las *mesas redondas de negociaciones* con el viejo gobierno constituyeron otro factor significativo para determinar el carácter de la transición y la consolidación políticas. Esto proporcionó a los líderes de la oposición experiencia en negociaciones políticas reales antes de hacer su entrada en el escenario político en el que asumirían responsabilidades de gobierno. La existencia de las mesas redondas significaba además el reconocimiento implícito por parte del gobierno de que realmente no representaba los intereses del pueblo y de que para establecer comunicación con la sociedad no le servían sus instituciones oficiales. Las mesas redondas se convirtieron en novedosas instituciones mediadoras entre el estado y la sociedad, en las que era la oposición la que planteaba las preocupaciones y demandas cívicas. Pero lo más significativo fue que brindaron a la oposición la oportunidad de consolidar sus propias filas. Con este tipo de ensayo general de la verdadera lucha por el poder y la competencia política, la oposición aprendió a superar diferencias sin importancia, a llegar a acuerdos en puntos de desavenencia relevantes, a dar prioridad a sus objetivos y a trabajar coordinadamente en la acción política. El legado más importante de la experiencia de las mesas de negociaciones consiste en haber convertido a disidentes exclusivistas y prepotentes en políticos efectivos.

3. Otro punto importante fue la *reforma de la economía y de las formas de propiedad*. A diferencia de la prolongada experiencia polaca, los húngaros sólo comenzaron sus mesas redondas poco antes del cambio de gobierno. En cambio, desde finales de los 60, habían realizado reformas económicas, monetarias y de la propiedad, bajo el nombre de Nuevo Mecanismo Económico. Este proceso se acelera durante la década del ochenta y Hungría pasa a formar parte de las principales instituciones financieras internacionales. Todo ello brindó a la mayoría de los húngaros cierta experiencia en la economía de mercado antes de la transición. El conocido *socialismo de los gulyas* dio paso a una liberalización económica más refinada que, llegado el momento, les permitió escapar de los *goulash* más fácilmente.

4. Por último, estaba la ventaja de *las reformas dentro del partido comunista* gobernante. Los ejemplos más destacados fueron Hungría y Eslovenia, si bien hasta cierto punto Polonia también atravesó por esta experiencia. Esto fue

importante pues eliminó la posibilidad de que se produjera una confrontación violenta durante el cambio de gobierno, en los delicados momentos antes y durante las primeras elecciones.

Estos cuatro elementos fueron determinantes en la transición en los países del Modelo Norte. Existió discontinuidad institucional, pero también contaron para empezar con reformas previas, élites alternativas, experiencia política y consenso acerca de la democracia.

Los estados del Modelo Sur, con Rumanía, Bulgaria, Croacia, Serbia y Albania como ejemplos, emprendieron las transformaciones en el año 1989. No poseían élites políticas alternativas, ni experiencia previa en la negociación o definición de objetivos y estrategias comunes, ni un liderazgo político alternativo que pudiera mostrar sus credenciales ya fuera en la política de oposición o en la formación de un consenso. Tuvieron manifestaciones públicas y marchas de protesta, y choques con el antiguo régimen y sus principales figuras, pero no habían formulado un consenso sobre lo que vendría después. Los grandes levantamientos constituyeron, en estos estados, el comienzo de los cambios, pero nadie sabía muy bien qué camino debían tomar. No eran, como en las revoluciones de terciopelo del Norte, la culminación del proceso de transición. Los cambios del Sur trajeron consigo nuevos regímenes y nuevos administradores del poder, pero nadie sabía qué resultados tendrían. Algunos no eran realmente tan nuevos, aunque la mayoría asumió una nueva identidad política. Lo que desató la energía que provocó el derrumbe de los viejos regímenes fueron los cambios en la Unión Soviética. O, como en el caso de las antiguas repúblicas yugoslavas, el comprender que nadie gobernaba y que el país se encontraba a expensas del que quisiera tomar el poder. Además de que sólo contaban con una oposición muy dispersa e inexperta, la transición ocurrió de una manera mucho más violenta en casi todos estos países. En Rumanía, hubo manifestantes muertos durante los enfrentamientos con la policía, y los antiguos dictadores Nicolae y Elena Ceaucescu fueron ejecutados; y entre tanto en la exYugoslavia se desató una guerra total. Como consecuencia de estos acontecimientos, las sociedades emergentes fueron más violentas e irracionales. Durante los años previos a la transición, los partidos comunistas se mantuvieron más o menos inmutables y los antiguos secretarios del partido se encontraban en tal estado de confusión que hubo que sacarlos de sus cargos casi físicamente cuando llegó el momento. En la mayoría de los casos, sus viejos camaradas tomaron el control con sólo cambiarle el nombre al partido y renovar algunas caras.

El hecho de que la oposición no hubiera desarrollado ninguna infraestructura institucional dentro del viejo régimen y que las nuevas circunstancias exigieran una movilización rápida y masiva, convirtió al nacionalismo étnico en un importante instrumento de acción política colectiva. Siempre había existido en potencia, era sencillo, universalmente comprensible, y funcionaba. Así que se transformó en uno de los principales obstáculos para la transición democrática, aunque sirviera para cambiar a los que se encontraban en el poder.

En toda Europa del este, durante el período de movilizaciones políticas y manifestaciones populares que precedió a las elecciones, el énfasis fundamental de los cambios se situaba en dos puntos:

1. *Democracia*

2. *Independencia nacional*, fuera de las cadenas que imponían el viejo régimen y los antiguos señores, fuera de convenios federales desiguales e impuestos, y con justicia para cada pueblo; o sea, un impulso para CORREGIR UNA INJUSTICIA HISTÓRICA.

Este énfasis tenía un carácter universal, y sus dos elementos podían encontrarse en los discursos, lemas, programas y declaraciones de los partidos de toda la región. Ambos constituyeron las piedras angulares de los cambios políticos y las promesas para el futuro.

Sin embargo, después de las elecciones y de la creación de las primeras instituciones de los regímenes emergentes, los distintos países dirigieron su énfasis hacia puntos diferentes. Hungría, Polonia y la República Checa acentuaron el camino hacia la democracia: la necesidad de desarrollar y estabilizar las instituciones democráticas, la consolidación de los procedimientos democráticos, el fortalecimiento del consenso sobre la naturaleza del régimen entre los diferentes grupos sociales. Los estados del Sur pusieron el énfasis en la justicia histórica. La importancia de las instituciones y los valores democráticos fue disminuyendo lentamente ante la euforia por la victoria sobre los antiguos regímenes y dictadores. El establecimiento de la justicia social y la verdad histórica tal y como la veían e interpretaban los nuevos gobiernos reemplazó todos los demás fines e intereses. Los dos objetivos que actuaron como fuerzas motrices durante los días violentos de la transición, con el reconocimiento y la aceptación de todos, llevaban consigo las fuentes de un desarrollo diferenciado. Al acentuar uno u otro en el proceso de estabilización, los nuevos regímenes de Europa del este zarpaban en dos rumbos muy distintos de evolución política. Tanto la elección del rumbo como su dirección dependieron en gran medida de las diferencias en la experiencia que precedió a la transición, de si existía o no una sociedad civil independiente y una élite política alternativa comprometida con el cambio democrático.

Estas diferencias trajeron como resultado dos formas de transición distintas en Europa del este, y lo que es más importante, dos procesos de consolidación diferentes a partir del cambio de gobierno inicial. El tiempo nos permite distinguir entre los dos procesos bien definidos que tuvieron lugar: la transición y la consolidación. Ahora bien, si la transición democrática significa (a) la creación de las instituciones esenciales de un nuevo sistema democrático y, (b) el diseño de nuevas normas que regulen los procedimientos y la conducta políticos, entonces este proceso sí ha llegado a su término en toda Europa del este. De manera más precisa, significa que las nuevas instituciones democráticas fundamentales han sido creadas. En lo que se refiere a las normas que regulan los procedimientos y la conducta, varían de un país a otro tanto en su carácter democrático como en el grado de cumplimiento y observancia prácticos.

Las características fundamentales que generalmente se utilizan para describir

la consolidación democrática son: (a) la estabilización de las instituciones democráticas creadas, (b) el predominio absoluto y aceptado de los valores democráticos, y (c) la formación de una amplia cultura democrática. Como ha señalado Przeworski: “La democracia está consolidada cuando, en determinadas condiciones políticas y económicas, un sistema político de instituciones se convierte en la única opción, cuando nadie puede imaginar el actuar fuera de las instituciones democráticas, cuando lo único que desean hacer los perdedores es probar otra vez dentro de las mismas instituciones bajo las cuales acaban de perder.”

Al aplicar estas fórmulas se hace evidente que existen diferencias considerables entre los estados poscomunistas en sus procesos de consolidación. Pero hay dos patrones esenciales y definitorios. Los países del Modelo Norte estabilizan sus nuevas instituciones, pero también consolidan ciertas normas del juego, un proceso democrático que ya había comenzado antes de que se erigieran las nuevas instituciones. Esto fue moldeando su cultura política antes de que sucediera la verdadera transición y el cambio de gobierno, y legitimó a las nuevas élites políticas no sólo como autoras de la caída del viejo régimen, sino como adalides de la democracia.

Los líderes políticos que tomaron el poder después de los cambios en los estados del Sur, no tenían trayectorias democráticas que mostrar. Casi todos provenían de los antiguos partidos comunistas no reformistas, que habían iniciado cambios superficiales sólo cuando se hizo evidente que la caída del antiguo régimen era inminente, o incluso después de su colapso.

Ion Iliescu, alto funcionario dentro del régimen de Ceausescu, utilizó el ímpetu de los sangrientos levantamientos populares, para apoderarse del control del gobierno interino. Con esta maniobra logró obtener el control de la convocatoria y las regulaciones de las primeras elecciones, asegurando así la victoria electoral para sí mismo y para el Frente de Salvación Nacional, dirigido a su vez por él y sus camaradas del viejo régimen. La rápida ejecución de Nicolae y Elena Ceausescu, arquitectos y símbolos supremos del terror totalitario en Rumanía, permitió a sus antiguos camaradas y colegas limpiar todas las culpas a expensas de los Ceausescu, que ya no podían defenderse. Como no habían existido ni mesas redondas de negociaciones ni movimientos independientes antes de estos acontecimientos, el Frente de Salvación Nacional apareció como la única fuerza política organizada y consiguió utilizar la transición para asegurar su propio dominio, y hacerse del control sobre el proceso de transición. No hubiera sido realista esperar que este grupo de influencia pusiera énfasis en los procedimientos y valores democráticos como fundamentos de su legitimidad política, puesto que no estaban ni familiarizados ni relacionados con una cultura política de este tipo. En consecuencia, se aseguraron de poner a un lado y silenciar las verdaderas exigencias de democracia que coreaban los manifestantes que derrocaron al gobierno de Ceausescu. La supresión del odiado dictador y de algunos de sus planes más diabólicos fueron invocados como fuente de legitimidad “real”. Este acto aislado fue presentado como la justicia tan esperada por el pueblo rumano, y por ende, como la fuente continua de legitimidad para Iliescu y el Frente de Salvación Nacional.

Bulgaria siguió un proceso muy similar en lo esencial. A pesar de que el cambio de gobierno no fue violento, estuvo dirigido fundamentalmente desde dentro del Partido Comunista Búlgaro, no reformista, y en medio de un “contexto muy gris” con movimientos independientes e iniciativas sociales escasos, débiles y desorganizados. El golpe de estado que depuso al viejo líder del partido Todor Zivkov estuvo encabezado por Petar Mladenov, un antiguo miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista Búlgaro, que había renunciado a su puesto sólo dos semanas antes. Ni Mladenov ni André Lukanov, el otro miembro del partido al frente del golpe, tenían una trayectoria, historial o conocimientos democráticos. No eran demócratas. Sencillamente fueron los que comprendieron que en la época de la Glasnost y la Perestroika, el dominio del Partido y su propio control del poder se encontraban amenazados por un viejo e inflexible líder que no sabía cómo hacerle frente a los cambios. Identificaron públicamente a ese líder con todo lo que el pueblo búlgaro odiaba del antiguo régimen. Específicamente, lo presentaron como el culpable principal de todo el desorden económico del país, la escasez constante y el nivel de vida miserable. El Partido Comunista logró así mantener la iniciativa que había tomado desde el principio. Incluso propuso una agenda y presidió los debates sostenidos con la oposición democrática en las mesas redondas que, casualmente, tuvieron lugar sólo después de que el partido se deshiciera de Zivkov, cambiara su nombre por el de Partido Socialista Búlgaro (PSB), y renovara con éxito su imagen. Apenas seis meses después de que comenzaran las Conversaciones de la Mesa Redonda, con una naciente y novísima oposición, el PSB ganó las primeras elecciones y logró continuar gobernando, ahora con una legitimidad adicional sin precedentes en su historia.

Linz y Stephan utilizan a Bulgaria como un caso *ejemplar* de transición controlada por el régimen. Esto significa la continuación del dominio de la clase en el poder, combinada con algunas variaciones institucionales y de procedimientos que ella introduce y controla. Pese a que liberalizó el régimen e introdujo una política pluripartidista, el PCB/PSB no permanecía en el poder gracias al triunfo de la democracia, ni porque hubiera luchado por la democracia. Permanecía en el poder porque (a) antes de 1989, su gobierno había sido lo suficientemente opresivo y totalitario como para impedir que surgieran grupos importantes de oposición, y (b) reconoció el momento adecuado para deponer a Todor Zivkov y arrojar la vieja imagen del partido junto con él. De esta forma, después de la transición, puso énfasis en elementos que le aseguraban su propia legitimidad política a los ojos de la nación: deshacerse de Zivkov y liberalizar la vida pública. Presenciar finalmente la ruina de su viejo dictador constituyó, sin lugar a dudas, una vindicación de la dignidad de Bulgaria, y para el pueblo sumido en confusa perplejidad se había hecho justicia después de tantos años de terror. Fue esta la proeza fundamental del nuevo gobierno. Insistir en la importancia de los procedimientos y la conducta democráticos sólo lograría debilitar su dominio.

Serbia, o el residuo de Yugoslavia, fue un caso aún más extremo. El proceso de transición aquí se vio reivindicado y absolutamente dominado por el partido

comunista y su jefe Slobodan Milosevic, incluso antes de que hubiera comenzado realmente. De cierta forma era el reverso exacto de los procesos que entonces tenían lugar en Polonia, Checoslovaquia y Hungría. En lugar de agrupaciones independientes e iniciativas cívicas que ganaran fuerza política con el apoyo popular y ejercieran una influencia cada vez mayor, en Serbia lo que existía era la Liga de los Comunistas de Serbia, que se fortalecía a medida que se reinventaba a sí misma a través de la lucha interna y un populismo nacionalista agresivo. Fue en 1987 que Milosevic comenzó a servirse de un nacionalismo excesivo para hacerse de la dirección de su partido. A continuación, eliminó políticamente la Liga de los Comunistas de Kosovo y sometió a la fuerza a los partidos de Vojvodina y Montenegro. Aquí fue donde se empleó primero la fórmula de culpar a antiguos camaradas del partido y rivales políticos de los fracasos del régimen, erigiendo el éxito político propio sobre su caída. En los discursos pronunciados por Milosevic y en las manifestaciones organizadas por él y sus seguidores del partido, llamaban a los antiguos dirigentes políticos de butacas (*fotelja i*), burócratas corruptos, vividores acomodados, se les culpaba por la decadencia económica de Serbia, y se les acusaba de traición a la causa, los intereses, la nación y la historia serbios. La intención original de Milosevic de valerse de la misma estrategia en su marcha hacia el poder en toda Yugoslavia, se vio frustrada por la específica composición étnica, constitucional y de desarrollo de la federación yugoslava antes de 1990. Fue necesaria una guerra destructiva y sangrienta para convencerlo de que esta estrategia no funcionaría.

Tuvo éxito dentro de Serbia y en la región virtualmente anexada de Montenegro. En estos territorios sí tuvo lugar la transición política, con manifestaciones y marchas populares, expulsión de viejos dirigentes partidistas, sustitución del nombre del partido comunista por el de Partido Socialista y aceptación en cargos de poder de intelectuales que antes habían estado censurados o de alguna forma excluidos. Entretanto, definía y dictaba irrevocablemente la agenda política de Serbia, al tiempo que avivaba un nacionalismo belicoso entre las masas serbias frustradas y desorientadas. Ya en 1989 se había logrado todo esto; y para cuando los recién bautizados Socialistas introducen el pluripartidismo y convocan a las primeras elecciones, los partidos de oposición estaban reducidos a tratar de alcanzarlos en la carrera nacionalista, pues en habilidades políticas y en infraestructura organizativa se encontraban desalentadoramente atrasados. El partido comunista de Serbia no sólo controló la transición hacia el pluralismo político; más que cualquier otro partido de Europa del este, logró realizarla sin ninguna ayuda. Reconoció su potencial, le dió impulso y lo utilizó hasta llegar a una política pluripartidista en la post-transición, con el celo de los verdaderos revolucionarios. Fue el camino que encontró para asegurarse de que nada cambiaría en el control que ejercían sobre el poder.

Este partido comunista y sus líderes ciertamente no iban a invocar la democracia para reivindicar su legitimidad, ni como su logro más importante. Después de todo, sólo permitieron las elecciones multipartitas cuando tuvieron la certeza de que poseían el control y dominio absolutos sobre el proceso de transición. Su éxito político se basaba en presentarse como adalides de la

defensa victoriosa de los intereses étnicos del colectivo serbio, la restitución del orgullo de la nación serbia, y sobre todo, la rectificación de las injusticias históricas que el pueblo serbio venía sufriendo desde el siglo XIV.

Albania también inició el camino de una transición controlada. Un año y medio después de la muerte de Enver Hoxha en la primavera de 1985, Ramiz Alia se convirtió en líder del país y de su único partido. Alia se dispuso, muy cautelosamente, a emprender la reforma del Partido del Trabajo Albanés —el último partido estalinista de Europa—, y a mitigar el aislamiento fanático y casi total en que se encontraba su país con respecto al resto del mundo. A Albania le quedaba un largo camino por recorrer, incluso para los patrones de los países comunistas vecinos. La liberalización inicial del control que ejercían las fuerzas comunistas y de seguridad no sólo sobre el estado, sino sobre todos los renglones de la vida cotidiana de sus ciudadanos, representaba ya un nivel de cambio y de libertad mayor del que la mayoría de los albaneses habían experimentado a lo largo de toda su vida. Con la liberalización comenzaron las manifestaciones de masas y los choques de los estudiantes con la policía, que gradualmente se convirtieron en la exigencia de que se pusiera fin a la dictadura y se convocaran elecciones multipartitas. Toda la estrategia para una transición controlada se fue convirtiendo en una especie de *transición por rebeldía*. Los primeros cambios tentativos produjeron reacciones que le arrebataron la iniciativa a los comunistas y les obligaron a comportarse más como una fuerza reguladora para evitar males mayores que como líderes en busca de un futuro mejor. Por supuesto, no podían apelar a ningún tipo de credencial democrática en el pasado, y ni siquiera estaban seguros de que les interesara obtenerlas para el futuro. En abril de 1991 ganan las primeras elecciones multipartitas, en primer lugar, porque la oposición representada por el Partido Democrático Albanés sólo tenía tres meses de edad, y el electorado que recién se estrenaba temía a la inestabilidad e inseguridad que comenzaban ya a emerger. Dos meses después de su primera victoria electoral, el partido comunista cambia su nombre por el de Partido Socialista de Albania, pero, en su congreso partidista de ese verano, en lugar de referirse a la democracia, volvió a invocar el legado de Enver Hoxha.

En la primavera de 1992, se convocaron nuevas elecciones y los Socialistas fueron reemplazados por un presidente, un gobierno y una mayoría del Partido Democrático. Pero ya ese mismo verano perdieron ante los Socialistas en las elecciones locales, y para el otoño comenzaron a arrestar a sus opositores. El creciente caos económico convenció a miles de albaneses de que su mejor oportunidad de acercarse a Europa era cruzar el Adriático e internarse en Italia como refugiados. Más tarde eran repatriados por los propios italianos, pero la insatisfacción y la desilusión con relación al nuevo gobierno crecían. El Partido Democrático se dedicaba cada vez más a purgar sus propias filas de aquellos pocos demócratas, y a saldar cuentas con sus opositores políticos enviándolos a la cárcel. A medida que pasaba el tiempo, fundamentaron su legitimidad cada vez más en su anticomunismo y menos en sus credenciales democráticas. De cierta forma se convirtieron en las víctimas de su propia propaganda. Pese a que muchos de ellos mismos habían sido miembros del

partido comunista en el pasado, ahora percibían el anticomunismo como un elemento más importante que la democracia para su identidad y su legitimidad. Así que en la primavera de 1996 decidieron que valía la pena adular los resultados de las elecciones para mantenerse en el poder. Se aseguraron una victoria por mayoría abrumadora, pero para Albania esto significó en realidad el principio del caos. Pese a haber votado sucesivamente a dos partidos distintos como mayoría parlamentaria, Albania todavía nunca ha tenido un gobierno realmente democrático.

Dentro de esta categoría Croacia es la única excepción. A diferencia de los demás países, su transición no se vio controlada por los comunistas, ni su post-transición sucumbió al dominio del partido comunista. Si se toman en cuenta otros criterios tales como su localización geográfica, historia política, nivel de industrialización, desarrollo económico, PNB per cápita correspondiente al período que antecede a la guerra de 1991, apertura y comunicación con el occidente y niveles de fuerza de trabajo cualificada y profesional, Croacia también se diferencia del resto de los países, y no se adaptaría a esta clasificación. Sin embargo, Croacia también acabó teniendo un gobierno autoritario después de su transición. Siete años después de sus primeras elecciones multipartitas, todavía no ha experimentado su primer cambio pacífico de dirigencia política a través de un proceso electoral. Si se toman como criterios decisivos la consolidación política y la dirección del énfasis, Croacia se ajusta al Modelo Sur. También en este país se ha echado a un lado el discurso sobre la democracia hasta casi hacerlo desaparecer durante los años que sucedieron a la transición. Durante 1989 y principios de 1990 se mencionaba como objetivo la democracia, con mayor frecuencia que la independencia, la justicia para la nación croata, o la “realización de su sueño de mil años” de convertirse en un estado. Pero en las primeras elecciones multipartitas de 1990 resultó ganador un partido populista y nacionalista, que según la mayoría del electorado croata tenía mayores posibilidades de éxito en la defensa de Croacia contra la agresión inminente de Milosevic. Los gobernantes nacionalistas utilizaron el anticomunismo y la derrota de los comunistas como fuente importante de legitimidad política, a pesar de que muchos de ellos, incluido el presidente del país, eran antiguos miembros y funcionarios del partido comunista. Esta estrategia dio muy buenos resultados.

En cualquier caso, el partido comunista croata no intentó tomar el control del proceso de transición. Incluso en este sentido, Croacia representó una excepción entre los países que en su etapa poscomunista desembocaron en regímenes autoritarios. Como en el caso de Checoslovaquia, el dominio comunista sencillamente se derrumbó. El partido comunista se encontraba tan desorientado políticamente que hasta se distanció de la minoría serbia que por entonces constituía el 12% de la población de Croacia, y que había votado masivamente a favor de los comunistas reformados en las primeras elecciones. Esto provocó que una gran parte de este electorado se echara en los brazos abiertos de los líderes nacionalistas serbios de Croacia. Por parte de los comunistas croatas fue un intento equivocado y miope de dejar en claro sus credenciales nacionalistas.

La guerra que sobrevino en 1991 y 1992 en territorio croata se suele dar como motivo del endeble desarrollo democrático de Croacia. De la misma manera, el hecho de que parte de su territorio estuviera ocupado y de que el último sector sólo deba regresar al control croata en 1997 –seis años después del estallido de la guerra y a siete de las primeras elecciones libres– ha servido de caldo de cultivo para el autoritarismo. Pero fue la amenaza de guerra, y la propia guerra, lo que llevó a los nacionalistas al poder y los ayudó a permanecer allí. No les obligó a abandonar la retórica democrática para favorecer el gobierno autoritario. La nueva clase dominante llegó al poder a través de elecciones democráticas, pero no estaba compuesta por demócratas. Formó su propio partido –Unión Democrática Croata– en el mismo año en que se convocó a las elecciones multipartitas. No tenía experiencia previa de ningún tipo de negociación política ya fuera con el gobierno o con otros grupos u organizaciones de oposición. En su mejor parte estaba integrado por antiguos miembros del partido comunista que habían quedado desencantados del Partido durante las décadas del 60 y del 70, y habían sido expulsados o habían desertado. Su experiencia política se limitaba a su militancia en el Partido y luego a sus intentos de publicar panfletos y ensayos políticos, con mayor o menor éxito. Algunos habían cumplido sentencias en prisión en los tiempos del viejo régimen y siempre por promover causas nacionalistas. Esto demuestra el carácter totalitario de este régimen, que encarcelaba a las personas por sostener determinadas opiniones y sentimientos políticos; pero confirma asimismo que los encausados eran nacionalistas hasta el punto de estar dispuestos a sacrificar su libertad por esta causa. El partido recibió además una creciente influencia de los nacionalistas mucho más extremistas de la comunidad de emigrados croatas, que apoyaron al partido con recursos financieros y luego con su regreso al país para ocupar posiciones importantes y de liderazgo.

Todas estas circunstancias no favorecían precisamente las inclinaciones democráticas o el desarrollo de tendencias democráticas dentro de la nueva élite gobernante. Era natural pues que al llegar al poder recurrieran a las causas y programas políticos que habían defendido gran parte de sus vidas. Su propósito esencial no era, ciertamente, la democracia, sino una nación o un estado independiente en donde se entendiera el término de nación más por lo que a grupo étnico se refiere que por su sentido político. Así pues, adoptaron una conducta política que señalaba que la “democracia” había cumplido su propósito con las primeras elecciones. Les ayudó a alcanzar su fin verdadero que era la independencia croata, enmendando así una injusticia histórica por la que Croacia había tenido que sufrir la dominación extranjera de los austríacos, los húngaros y, durante los últimos 70 años, de los serbios. Fue esta, de manera clara, la legitimidad política sobre la que erigieron su poder, y que utilizaban para justificar su control prolongado sobre el gobierno. Como en todos los casos anteriores, invocar la democracia sólo podría debilitar este tipo de legitimidad. De modo que, a pesar de que la transición croata no fuera controlada en nombre del partido comunista, sí lo fue en el nombre de la Nación. En cuanto a las características del nuevo gobierno que trajo consigo, los

resultados fueron muy similares: con el tiempo, abandonó también su discurso sobre la democracia y se apoyó en la conquista de la justicia histórica para su pueblo como la justificación más importante para su permanencia en el poder.

Esta característica común de situar el énfasis en *la justicia* y no en *la democracia* como logro central del nuevo régimen, es un indicador significativo del desarrollo político que tuvo lugar en los estados del sur. Vivieron un proceso de transición política y han comenzado a consolidar sus nuevos regímenes; pero estos regímenes no son democráticos. Consideraban que las victorias que alcanzaron en elecciones multipartitas saldaban ya sus obligaciones con respecto a la demanda popular de democracia que los había elevado al poder. Una vez allí, la mayoría de los otros aspectos de la democracia fueron tratados como excesos que no estaban dispuestos a tolerar en su electorado.

Si se analizan los elementos básicos que conforman un estado democrático, se podrá observar que ninguno de estos países se ajusta a esta definición:

1. Libertad de los medios de difusión. Representa el prerequisite casi más importante para cualquier democracia que funcione. Ha constituido un punto neurálgico en esta región. Las técnicas que utilizan para silenciar las voces críticas o disidentes van desde la violencia física directa contra los periodistas y propietarios de editoriales y periódicos, hasta la creación de un flujo permanente de acusaciones por libelo en contra de periodistas y publicaciones independientes.

2. Igualdad y libertad de competencia entre los diferentes partidos políticos y sus líderes. El hecho de que exista un control estatal casi absoluto sobre los medios electrónicos, tergiversa gravemente el sentido de las votaciones. Son muy conocidos además los casos de manifestaciones de opositores que han sido disueltas por la policía, de candidatos y líderes de la oposición que han sido golpeados, sometidos a juicio, y encarcelados por realizar actividades políticas pacíficas y bajo falsas acusaciones.

3. Respeto por el proceso democrático, o sea, absoluta conformidad con todos los criterios respecto a los procedimientos democráticos. Es una característica común a todos los países del sur el que sus regímenes perciban las elecciones multipartitas como sinónimo de democracia. Se entiende que la victoria electoral concede a los ganadores el derecho a gobernar. Pero el hecho de que este derecho existe solamente si se ejerce dentro de unos procedimientos democráticos bien definidos, que garantizan los derechos de las minorías políticas y que están sujetos al escrutinio de un cuerpo de justicia independiente, queda enteramente descartado. En el mejor de los casos, conciben la democracia como algo que se asoció en algún momento a las elecciones, y de ninguna manera como un proceso continuo a través del cual deberá reafirmarse y revalorarse una y otra vez la naturaleza democrática del gobierno.

4. Elecciones libres y justas, lo que incluye la aceptación de sus resultados, o sea, hacer de las elecciones “la única opción” en lo que se refiere a la escalada al poder. Puesto que las elecciones fueron aceptadas como su única fuente de legitimidad democrática, especialmente ante la indispensable comunidad internacional, los gobiernos prefirieron manipularlas y robarse los votos antes que eliminarlas completamente o ignorar sus resultados.

Existen ejemplos suficientes en todos los países del sur que demuestran que las elecciones no se han convertido precisamente en “la única opción”. Todavía es frecuente el uso de otros medios para llegar al poder y permanecer en él; y no hay ninguna certeza de que el perdedor en realidad abandonará el gobierno. De hecho, cada vez que esto sucede, como en el caso de Iliescu después de las elecciones de 1996 en Rumania, surgen sentimientos de incredulidad y suspiros de alivio tanto dentro del país como en el resto de la región.

Es obvio que ni siquiera se han cumplido los criterios más elementales para lograr una consolidación democrática. Pero no es menos evidente que sí se produjo un cambio político considerable. Los países que conforman el Modelo Sur ya no son aquellos de antes de 1990 en los que primaba el poder totalitario de un solo partido y donde no existía ninguna organización secundaria fuera del aparato estatal. A pesar de que ahora se encuentran bajo el dominio del partido gobernante, cuentan al menos con un limitado pluralismo político y un pluralismo social y económico muy amplio. Éste último incluye numerosas agrupaciones profesionales y de interés, así como la coexistencia de diferentes formas de propiedad y de corporativismo impensables antes de los cambios. Se ha ido desarrollando un sector privado más autónomo que, aunque implica todavía mucho favoritismo e interferencia por parte del estado, se diferencia de la economía estatal anterior. Las iglesias desempeñan un papel más activo y visible y, especialmente en países como Albania, Bulgaria y Rumania donde la religión estaba más o menos prohibida, se hace palpable el cambio hacia una mayor libertad de creencias religiosas. Por último, hay mucha actividad cultural variada y visible, que antes era inexistente o bien clandestina.

Todos estos distintos aspectos que indican un evidente cambio político, sin embargo, guardan una mayor correspondencia con la definición de régimen autoritario que con la consolidación democrática. En lugar de la difusión de los valores democráticos y la adhesión a las normas de conducta y los procedimientos democráticos, surgieron unos híbridos políticos que combinaron las nuevas instituciones democráticas con la cultura política heredada de la época del totalitarismo. Las clases gobernantes posteriores a 1990 fueron autocráticas e intolerantes, utilizando con frecuencia la violencia para asegurar su control sobre el gobierno y para silenciar a la oposición política. Abandonaron sus fines democráticos para favorecer una corriente de renacimiento nacionalista y acentuaron cada vez más su papel en el logro de la independencia y la justicia histórica para sus pueblos como fundamento de su legitimidad.

Diversas experiencias disminuyeron la credibilidad democrática de las elecciones entre el electorado de estos países. Entretanto, sin embargo, los gobiernos habían descubierto que a pesar de los fraudes, la violencia, la desigualdad, el control sobre los medios de difusión, y el robo de votos y resultados, estas elecciones aún lograban brindarles legitimidad democrática y aceptación ante la comunidad internacional. Por tanto, en lugar de garantizar esta legitimidad del gobierno frente a su propio electorado, las elecciones sirvieron para hacerlo ante el resto del mundo. Los partidos gobernantes advirtieron que con la celebración de cualquier clase de elección multipartita

obtendrían la aceptación de la comunidad internacional, con lo que quedarían, por otra parte, libres de hacer más o menos lo que desearan. De esta forma, las elecciones se convirtieron en un instrumento para conquistar la legitimidad en el exterior y no en el interior de sus países.

El deterioro de las elecciones como institución democrática muestra las limitaciones del “pluralismo político limitado” que se establece en los regímenes autoritarios. Acentúa además el hecho de que las recientes instituciones poseen muy poca *persistencia democrática* en estos países. Si se entiende como la durabilidad de las instituciones y las actitudes democráticas, la *persistencia democrática* indica la estabilidad de un sistema democrático. Aunque pueda alcanzar su plenitud a partir de un largo proceso de consolidación democrática, requiere de un desarrollo gradual, a través del tiempo. El debilitamiento del carácter democrático de las elecciones, tal y como fueran presentadas en las primeras etapas de la transición, de hecho está reduciendo peligrosamente las posibilidades de desarrollar ningún tipo de persistencia democrática bajo estos regímenes políticos.

Existen evidencias, sin embargo, de una persistencia hacia el autoritarismo —una obstinada durabilidad de patrones de conducta, actitudes, y normas autoritarias— que lentamente van preparando el camino hacia las instituciones igualmente autoritarias.

La persistencia hacia el autoritarismo se ve reforzada por el hecho de que en los estados que conforman el Modelo Sur sólo existía, antes de 1989, un consenso negativo. Prácticamente todos los sectores de esas sociedades, y una gran parte de la élite gobernante, estaban de acuerdo en que los viejos regímenes tenían que desaparecer. A diferencia de Polonia, Hungría y hasta cierto punto Checoslovaquia, estos países no poseían un consenso o una imagen compartida sobre el sistema político que los reemplazaría. Los grupos de opositores tanto fuera como dentro de los viejos partidos comunistas salieron a escena el mismo año en que ocurrieron los cambios. No había tiempo ni oportunidad real para construir un amplio entendimiento común sobre la naturaleza y el carácter del estado y constitución política futuros; el proceso de creación de un nuevo contrato social no tuvo lugar. A partir de la transición, la ausencia de un consenso elemental creó un vacío donde todos reincidían en conductas políticas conocidas en medio de nuevas y desconocidas instituciones democráticas. El modelo que surgió como consecuencia de la combinación de estos dos elementos es un modelo autoritario: Y fue este régimen político autoritario el que se consolidó en los estados de Europa suroriental durante los primeros seis o siete años de post-comunismo.

Sin duda, estos regímenes autoritarios representaron un paso adelante en el desarrollo político de estos países. Incluso el pluralismo político limitado y cierta infraestructura institucional democrática constituyen un desarrollo positivo comparados con la época de la dominación del viejo partido único y del firme control estatal sobre la sociedad. Para lograrlo, estos países debieron sufrir una transición en 1989 y 1990 que tuvo un carácter revolucionario aunque sólo fuera por la discontinuidad institucional que creó. Pero a pesar de todo

ese cambio incuestionablemente dramático y ese desarrollo político, lo que sobrevino no fue la democracia.

Los regímenes autoritarios que surgieron y que se consolidaron como resultado de la primera transición, gobernaron sobre ciudadanos cuyas aspiraciones eran definitivamente democráticas. Es cierto que al principio “democracia” probablemente significó, para la mayoría de las personas en estos países, igualdad en la libertad para lograr el bienestar económico, en lugar de significar un sistema de controles y balances técnicamente más definido. Pero estos objetivos hace ya mucho tiempo que se depreciaron, y aún no existen ni la igualdad ni la libertad, y en cuanto a la ambición de un bienestar económico, se ha visto rápidamente reemplazada por la lucha por la supervivencia. Sin embargo, la gran mayoría de la población continuó percibiendo la democracia como el mejor sistema político, fin que esperaban alcanzar, aunque sólo fuera porque había sido el objetivo inicial por el que habían luchado.

La consolidación de los regímenes autoritarios establecidos durante la transición de 1989 y 1990 no era la manera de alcanzar ese objetivo para los países del Modelo Sur. De la misma forma que no hay solución de continuidad entre el totalitarismo y el autoritarismo, tampoco la hay entre un régimen autoritario y la democracia. En todo caso, el elemento de pluralismo político y de autonomía social tiene más probabilidades de deteriorarse, y los patrones de conducta y usos políticos autoritarios se endurecen en sus formas rígidas y sus prácticas cada vez más sofocantes. El autoritarismo estabilizado no evolucionará por sí mismo hacia una democracia, pero sí representa un punto de partida. El punto de partida para una nueva transición democrática que todavía deberá ocurrir en estos países y que finalmente los pondrá en camino hacia la consolidación democrática.

Esta segunda transición se hace necesaria para aproximarse al objetivo por el que cientos de miles de personas, desde Bucarest hasta Zagreb, y desde Tirana hasta Belgrado, marcharon por las calles; pero es una transición que requerirá de nuevas estrategias políticas. El viejo *modelo de revolución de terciopelo*, basado en la discontinuidad institucional o el desmantelamiento total de la vieja infraestructura y la creación de nuevas instituciones que la sustituyan, no puede volver a aplicarse. Por numerosas razones este modelo es ya obsoleto en estas nuevas circunstancias. Una de ellas es que ya se ha probado una vez. Pese a que pudiera argüirse que la movilización de las masas y la total discontinuidad institucional, distintivos de la revolución de terciopelo, fueron sólo simuladas en estos países, para la mayoría de la población fueron acontecimientos muy reales. Aun cuando fueran manipuladas y utilizadas por los viejos comunistas o los nacionalistas autocráticos que advirtieron que éste era su momento para asegurarse el poder, para aquéllos que lucharon en favor del cambio y se enfrentaron a la policía en las calles, o al ejército en el campo de batalla, que se afiliaron a nuevos partidos y votaron a favor de parlamentos nuevos, que festejaron sus nuevas constituciones y pensaron que ahora iban a pasar a ser europeos no sólo geográficamente, sino también políticamente, para todas estas personas parecía real. Por lo tanto, su decepción ante el desenlace fue

también muy real. Creyeron que iban hacia la democracia, aunque sus líderes nunca tuvieron intenciones de conducirlos hasta ella. Sería absurdo intentar comprometer a estas personas con la misma estrategia otra vez y creer que ellos van a confiar en que ahora sí funcionaría. Al haberse empleado ya, esta estrategia ha agotado su poder de seducción y su fuerza para arrastrar a las masas; o, como comprendería incluso un marxista mediocre, la historia no se repite a sí misma excepto como farsa.

La otra razón, tan significativa como la primera, es algo en lo que todos los estudiosos de la transición están de acuerdo: uno de los factores más importantes para determinar la naturaleza de un proceso de transición y el tipo de régimen al que conducirá, se encuentra en la naturaleza del régimen no-democrático del que se parte y que el país va dejando atrás. El modelo de revolución de terciopelo, en los países donde funcionó realmente, fue efectivo pues se partía de regímenes totalitarios y posttotalitarios. En los países de Europa suroriental, la democracia debería emerger ahora del autoritarismo. Ha cambiado el punto de partida y, en consecuencia, se debe seleccionar y modificar la estrategia para realizar la transformación política.

En realidad, el modelo que se ha utilizado con éxito para salir de regímenes autoritarios es el Modelo Mediterráneo, es decir, las estrategias para la transición aplicadas en Portugal y España en la década del 70 durante sus luchas para deshacerse de su rígido autoritarismo. Diez años después de que se iniciara la transición en España, se consideraba que se había consumado la consolidación democrática; de hecho, el 76% de la población pensaba que la transición hacia la democracia había tenido éxito. Creían que habían logrado el objetivo que se habían propuesto. Aunque, evidentemente, existían considerables diferencias entre la experiencia española y la portuguesa, sus características comunes más importantes eran que ambos países habían tenido como punto de partida regímenes autoritarios con pluralismo limitado, habían logrado atravesar por una vertiginosa transición y un proceso de consolidación democráticos con gran éxito, y para ello no habían destruido la infraestructura institucional que ya poseían, sino que la habían aprovechado como cimiento para la nueva.

Si existe algo que los países de Europa suroriental no podrían sufrir nuevamente es otro proceso de total discontinuidad institucional y de indagación en el pasado. Desde finales de la década de los 80, muchos de los temas de la política cotidiana se centran en debates para re-escribir o re-interpretar la historia de estos países. La tendencia de estos nuevos regímenes democráticamente insuficientes a fijar su legitimidad en la corrección de la injusticia histórica, ayudó a intensificar un clima político cuyos debates más candentes se centran con mayor frecuencia en diferentes interpretaciones definitivas sobre el pasado, que en ideas y planes para el futuro. Parecía como si todas las pasiones y los recursos políticos se desgastaran en esa exégesis del pasado, lo que dejaba muy poca atención que dedicar al futuro desarrollo político. Esta tendencia deberá revertirse si se quiere tener éxito en una política orientada al futuro.

El Modelo Mediterráneo se vió obligado a ocuparse de estos dos asuntos. A lo largo de todo el proceso de transición, garantizó la continuidad institucional

y evitó un prolongado debate político sobre el pasado. Por supuesto, esto no significa que se deba olvidar o esconder el pasado, sino solamente que debe ponerse en manos de los historiadores y estudiosos de las ciencias sociales y, quizás, incluso de los cuerpos judiciales, pero no se debe permitir que actúe como sustituto de la política del presente.

Para desembarazarse del recién establecido autoritarismo, los países de Europa suroriental deben pasar por su segunda transición, esta vez *negociada* —una estrategia llevada a la práctica también dentro del Modelo Mediterráneo. El elemento que define esta transición negociada es que, en tanto que trae consigo las transformaciones esenciales, garantiza también la continuidad y la estabilidad institucionales. Asume que los ciudadanos de un país son más avanzados políticamente en sus aspiraciones y en lo que esperan del gobierno que la élite gobernante. Lo más significativo es que este modelo supone la existencia de un amplio consenso sobre la necesidad de adherirse a los procedimientos democráticos y de seguir las reglas del juego democrático en la competencia política y la dirección del país.

La transición negociada no implica el corporativismo de estado, que con el nombre de unidad nacional a menudo defienden los partidos gobernantes. No quiere decir que la oposición pase a formar ningún tipo de coalición política con el partido en el poder; obtenga puestos en los ministerios, y deje de oponerse al gobierno y de luchar por ganar votos para su proyecto. Esto significaría su renuncia al proceso político, lo que es peor, socavaría el proceso político hasta el punto de exterminarlo. La función más importante de los partidos opositores es oponerse entre sí, ofreciendo opción política al electorado, y un control efectivo de las acciones de los otros a lo largo de todo el camino. Es la única manera efectiva de proteger los intereses públicos. Pero, al mismo tiempo, este proceso puede tener lugar solamente si todos los participantes están de acuerdo en respetar las instituciones y procedimientos democráticos: competirán en la arena política, pero respetando las leyes del juego. En el momento en que se produce la primera transición a principios de los noventa, los países de Europa suroriental no poseían instituciones democráticas, ni propiedad privada, ni bases para desarrollar una economía de mercado. En lugar de legítimas instituciones, contaban sólo con sintagmas ideológicos para ocuparse de los problemas relacionados con el nacionalismo, el regionalismo, la pobreza o el desempleo. No tenían tampoco a nadie con quien negociar. Los partidos de la oposición eran insignificantes, desorganizados, se sentían decepcionados por haber perdido las elecciones e inseguros con relación a la naturaleza exacta de sus programas políticos. Se estaban produciendo demasiados cambios de manera simultánea, los principales contendientes todavía no estaban bien definidos y sus fuerzas eran muy desiguales, y nadie sabía con certeza cuáles eran o debían haber sido las reglas. Esto hacía imposible aplicar el modelo de transición negociada.

Sin embargo, durante los siete años que han transcurrido en la etapa postcomunista, la situación ha ido cambiando de modo gradual. Se establecieron instituciones democráticas esenciales y se introdujeron cambios que tienden

hacia la economía de mercado. Esta última experiencia, sin embargo, desmitificó la noción romántica de lograr el bienestar económico con la entrada al capitalismo. Por el contrario, convirtió la pobreza, el desempleo, la salud pública y las pensiones por jubilación en temas políticos reales y cruciales. La violencia y las guerras por asuntos étnicos demostraron de forma drástica que la ideología no puede resolver estos problemas sin instituciones mediadoras legítimas y sin el cumplimiento estricto de los preceptos legales. Por último, los principales partidos dentro del proceso político se hicieron más perceptibles, fuertes y articulados. Se convirtieron en adversarios reales en la lucha por la dirección política. La primera transición hizo posible el surgimiento de opciones políticas diferentes. La mayoría de ellas ya ha tenido experiencias con sus propios radicales y extremistas. Los moderados deberán ahora, ante todo, emprender la labor de lograr el control de sus partidos para luego, junto a otros contendientes políticos importantes, definir las reglas para la transición democrática. El objeto de su estrategia negociada no estará en eliminar, ni siquiera reducir, las diferencias políticas, sino en determinar el territorio sobre el que tendrá lugar la contienda política. Quiere decir, por ejemplo, que el poder de la ley, el respeto por la propiedad privada, la igualdad política, la independencia del poder judicial, y la aceptación de los resultados de las elecciones no estarán supeditados a la política de los partidos. Todos los partidos deberán apoyar y defender la estrategia. Las opciones políticas dejarán de ser el “pasado” y el “futuro”, o la dictadura y la democracia, sino que podrán hallarse entre diversas líneas políticas, todas a su vez dentro del sistema democrático.

De todas las divisiones y diferencias políticas en el contexto de Europa suoriental, la diferencia más sobresaliente y, actualmente, la única realmente importante es la que existe entre aquellos que aceptan estas reglas como las *únicas* posibles y los que están dispuestos a respetarlas sólo mientras que los mantengan en el poder. Esta división marca todas las líneas políticas y partidistas y constituye un elemento decisivo para el futuro de estos países. Tal y como hemos aprendido de manera tan penosa con las lecciones del pasado más reciente, el solo hecho de que alguien se oponga a un régimen totalitario o autoritario no lo convierte en un demócrata. Así que el simple cambio de los individuos en el poder no representa la garantía de que se lleve a cabo la transición democrática. Lo que se debe cambiar es la forma predominante en que se considera y se dispone del poder: una redefinición de las estrategias aceptables y legítimas para llegar al poder y de las reglas que rigen la conducta mientras se gobierna.

Por supuesto, este tipo de cambio se produce gradualmente. Prevalece sólo cuando existe una gran mayoría de personas, tanto en el ámbito político como en la sociedad en su conjunto, que reconoce las ventajas que conlleva un sistema donde predominan los valores, la conducta y los procedimientos democráticos, con libertad de prensa y pluralidad de opciones. Debe existir la creencia generalizada de que la comunicación política, cultural y económica con el mundo es la única forma de asegurar la prosperidad individual y colectiva de un país. Los años posteriores a la caída del comunismo en estos países

han aumentado las expectativas en este sentido y, también, han generado la frustración ante la política autoritaria, que no ha podido siquiera comenzar a satisfacer estas esperanzas. Incluso dentro de los partidos gobernantes de toda la región han aparecido facciones y alas moderadas que defienden el respeto a las reglas esenciales del proceso democrático y que se oponen al aislacionismo y relativismo cultural cada vez mayor de sus líderes. Como frecuentemente se fundamentan en el interés generacional de personas más jóvenes que aspiran a carreras políticas más prolongadas, estas facciones han aumentado su fuerza y su influencia.

Ahora toca a su fin esta primera etapa de cambio gradual de valores, y se han sentado las bases para la transición negociada de tipo Mediterráneo pues tanto los moderados dentro del régimen como los moderados dentro de la oposición democrática poseen algún poder y van fortaleciendo sus posiciones respectivas.

Un importante obstáculo al cambio democrático en estos países ha sido el hecho de que el cambio político comenzara antes de que se originara un consenso y apoyo universal hacia las normas democráticas. Esto abrió las puertas a la política autoritaria por parte del gobierno. Este cambio, sin embargo, sí hizo posible que se ampliaran los intereses políticos, el número de organizaciones no-gubernamentales y las iniciativas que aparecían en el escenario político. Estas, a su vez, han ayudado a crear una atmósfera en la que el autoritarismo ha pasado a ser contraproducente incluso para la supervivencia de los partidos que se encuentran en el poder, y en la que todas las partes se están alistando para participar en una segunda transición, ahora democrática.

En lugar de considerar a los regímenes poscomunistas de la región como un tipo de democracia de segunda clase, de *democracia para salvajes*, se les debe comprender y analizar como lo que son: sistemas políticos autoritarios, similares a los que existían en los países mediterráneos de Europa del sur con anterioridad a su transición hacia la democracia. De modo que se debe planificar y canalizar su futuro desarrollo político, que no deberá ser ya un proceso de consolidación, sino un salto hacia una transición democrática negociada. Teniendo en cuenta el carácter de esta transición y la experiencia del Modelo Mediterráneo, es importante recordar que la actual infraestructura institucional deberá asegurar la continuidad institucional en el futuro. Los acontecimientos políticos que han tenido lugar en la región a finales de 1996 y en 1997 demuestran que, de hecho, este proceso ya ha comenzado.